

decretar dicha exhibición, previniéndoles que para llevarlo á efecto nombren una comisión compuesta de un número de personas que no podrá exceder de cinco. Se hará aquella en las Oficinas de la misma Compañía, señalando con su audiencia las horas y la forma en que se haya de realizar, para que no se perturbe ni embarace el curso de sus operaciones. Los gastos judiciales de la exhibición y de los testimonios que se saquen, son de cargo de los acreedores á cuya instancia se practique esta diligencia.

Art. 12. Los convenios de que habla el artículo anterior entre las Compañías y sus acreedores, serán obligatorios para todos los interesados en el ferrocarril, siempre que concurra la adhesión de las mayorías que se expresan en los siguientes párrafos.

Para los cómputos de esas mayorías siempre que por virtud de esta Ley los representantes de las Compañías hayan de presentar balances, sin que se entienda que se prejuzga cuestión alguna de preferencia, dividirán el pasivo en tres grupos: uno compuesto de los créditos de trabajo personal y de los procedentes de expropiaciones, obra y material no satisfechos por la Compañía; otro de los portadores de obligaciones por el capital que las mismas representan y por los cupones y amortización vencidos y no pagados, computándose los cupones y amortización por su valor total y las obligaciones, según el tipo del Real Decreto de 8 de Febrero de 1865 y el tercero, de todos los demás créditos que existan contra la Compañía, cualquiera que sea su naturaleza y orden de prelación entre sí y con relación á los créditos de los grupos anteriores.

Presentada por la Sociedad la proposición de convenio, el Juez mandará que en término de quince días se publique en los periódicos oficiales, ó en su defecto en uno de los de más publicidad en el lugar del juicio, un edicto convocando á los acreedores para que en el término de tres meses acudan á adherirse á la proposición de convenio, que se insertará en el mismo edicto. Si el hecho tuviese lugar en las Antillas, se publicará además el edicto y la proposición de convenio hecha por la Sociedad en los periódicos de Madrid, Barcelona, Nueva-York, París y Londres, y si fuese en el Archipiélago Filipino, en los de Madrid, Barcelona, París, Londres y Liverpool. En los convenios no tendrán representación las obligaciones en cartera ni las figuradas.

No será necesario el otorgamiento de escritura pública para acreditar la adhesión al convenio, bastando que aparezca en cualquiera forma que han querido obligarse con arreglo al principio establecido en la Ley 1.^a título 1.^o, libro 10 de la Novísima Recopilación.

Los obligacionistas para enviar sus adhesiones, habrán de acompañarlas con un resguardo del depósito que hayan efectuado de sus títulos ó cupones, con la numeración de ellos, ya en las Cajas del Gobierno, ya en los Bancos, ya en las Cajas de las Compañías deudoras y sus sucursales y banqueros, ya en los Consulados de españoles establecidos en el extranjero, ya en los extranjeros residentes en España. Una carta de adhesión con el resguardo del depósito será suficiente para estimar la aceptación del convenio. La personalidad de los acreedores de los otros dos grupos se estimará acreditada para este efecto por lo resultivo del balance, y bastará la adhesión en cualquiera forma de las expresadas sin necesidad de otro requisito.

Si dentro del plazo de tres meses se adhieren al convenio acreedores con representación de tres quintas partes de cada cual de los tres grupos en que están divididos, se aprobará.

En el caso de no obtenerse adhesiones bastantes, se hará nueva publicación del convenio dentro del término de quince días en los mismos periódicos, para que en el plazo de dos meses acudan á adherirse los acreedores que ya no lo hubiesen efectuado, ó si lo creyesen preferible á manifestar su oposición en la misma forma dispuesta para las adhesiones, y acreditándose las personalidades por los que no las hubiesen acreditado anteriormente.

Resultando que todas las adhesiones representan dos quintos del total de cada uno de los primeros grupos, y que no haya oposición que exceda de otros dos quintos de cualquiera de dichos grupos, ó del total pasivo, se aprobará el convenio, publicando la sentencia y los números de las obligaciones adheridas en el PERIÓDICO OFICIAL del lugar del procedimiento y en la Gaceta de Madrid. En los demás casos no tendrá efecto el convenio y se declarará á la Empresa en estado de quiebra definitiva.

La providencia del Juez es apelable para ante la Audiencia del Territorio en el término de treinta días, contados desde la publicación en la GACETA, pudiendo recibirse á prueba el pleito en esta instancia si se alegase algún hecho pertinente á juicio del Tribunal, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1157 del Código de comercio. Contra la sentencia que esta dicte habrá lugar al recurso de casación; por si la de primera Instancia aprobase el convenio, se llevará á ejecución sin perjuicio de lo que se resuelva en superiores instancias.

Art. 13. Si fuese desaprobado el convenio por sentencia que causare ejecutoria, si transcurriese cuatro meses desde la declaración de suspensión de pagos sin que se someta el convenio á la aprobación del Juez, ó si aprobado el convenio no se cumpliera por la Compañía deudora, se declarará esta en estado de quiebra definitiva, siempre que en el último caso le pidan acreedores que representen la vigésima parte al menos del pasivo. Hecha que sea esta declaración se constituirá á nombre del Gobierno un Consejo de incautación compuesto de nueve personas, un Presidente nombrado por

el Gobernador General, dos representantes de los accionistas, uno por cada cual de los grupos de acreedores y el resto á pluralidad de todos los acreedores, efectuándose el nombramiento por cartas dirigidas al Juez, y también se nombrarán ocho suplentes en la misma forma y por los mismos grupos.

Art. 14. El auto declaratorio de la quiebra se pondrá en conocimiento del Gobierno, pero no se notificará á las partes ni se publicará por edictos hasta tanto que aquel se haya incautado del ferrocarril y sus dependencias y haya organizado provisionalmente su administración y explotación conforme se establece en el artículo anterior, y con arreglo á lo dispuesto en el 36 del Real Decreto de 10 de Diciembre de 1858.

Inmediatamente despues de organizado provisionalmente el servicio de explotación se procederá á la tasación del camino debiendo anunciarse la subasta con término de seis meses para que se realice al año de aquella organización ó ántes si se hubiesen reconocido y graduado los créditos.

El rematante podrá ofrecer en esta subasta como precio del remate, y le serán admitidos, créditos contra la Empresa de cualquiera de los tres grupos determinados en el artículo 12 y conforme al balance, bastando respecto á las obligaciones la confrontación talonaria, y con las condiciones siguientes:

1.^a Obligación de satisfacer á metálico los créditos que se declaren ó estén declarados preferentes en el juicio de quiebra.

2.^a Dar participación á prorata á todos los créditos de su clase que lo soliciten dentro de seis meses y se asocien al efecto, y reconocer y obligarse á pagar á los que no se asocien por el importe que se representen, hecha prorrata entre el total de ellos del valor líquido en venta, deducidos los pagos preferentes.

3.^a El rematante si fuese obligacionista, en el término de treinta días consignará en depósito una cantidad de dinero ó valores del Estado por el precio de cotización reponiendo cada dos meses las bajas, si las hubiese, equivalentes al importe de los créditos del primer grupo por lo que resulte en el balance, á salvo del que arroje respecto de esto la graduación.

Si fuese el rematante acreedor común, consignará además en depósito, dentro del mismo plazo, lo necesario para pagar los cupones y amortización no satisfechos, y en todo caso los rematantes hipotecarán también el camino á las demás obligaciones impuestas por el remate.

Si el precio del remate se pagase en dinero, hechas las deducciones que corresponden con arreglo al artículo 4.^o de esta Ley, se depositará el líquido en las cajas de Depósitos del Gobierno ó en los Bancos designados al efecto por el Gobernador General, pasando el ferrocarril libre de toda deuda á manos del nuevo concesionario.

Realizada la subasta en esta forma quedarán cancelados los títulos y extinguida la hipoteca sobre el camino, respecto de todos los créditos asociados, y el rematante ó nuevo concesionario se entenderá subrogado á la anterior Empresa con relación al estado en todos los derechos y obligaciones referentes al ferrocarril subastado.

No habiendo postores que en la primera subasta cubran el total avalúo del ferrocarril, se anunciará inmediatamente con término de seis meses la segunda subasta, en que se admitirán posturas que cubran las dos terceras partes de dicho avalúo.

Art. 15. El Consejo de incautación que administre y explote el ferrocarril, estará obligado: 1.^o á depositar con carácter necesario los productos en la Caja general de Depósitos ó en los Bancos designados al efecto por el Gobernador General despues de deducidos y pagados los gastos de administración y explotación; 2.^o á entregar en la misma caja ó Bancos y en el concepto también de depósito necesario, las existencias en metálico ó valores que tuviera la Compañía al tiempo de la incautación y 3.^o á exhibir los libros y papeles pertenecientes á la Compañía, cuando proceda y lo decrete el Juez á instancia de parte.

Art. 16. El auto declaratorio de la quiebra se notificará á los acreedores, á cuya instancia se hubiese dictado y al Consejo de administración de la Compañía, y se publicará además por edictos que se insertarán en los Periódicos oficiales ó de mayor publicidad que se refieren en el artículo 12.

Dicho auto contendrá la convocatoria de los acreedores de la Compañía quebrada á la primera junta general, que tendrá lugar tres meses despues de la inserción de los edictos en la GACETA OFICIAL del territorio donde la quiebra hubiera tenido lugar.

Art. 17. Los tenedores de títulos al portador, para ser admitidos en Juntas y ser parte en el juicio de quiebra, los presentarán al Juez; y resultando legítimos por la confrontación talonaria se les pondrá un sello que diga "Confrontado para la quiebra" y se devolverán, quedando en autos nota expresiva del número y serie, capital y cupones. El tenedor de esos títulos con dicho requisito que los cobiba en cualquier acto tendrá representación de ellos.

Art. 18. El nombramiento de Síndico se hará en la primera junta de acreedores y en la forma que previenen los artículos 1068 al 1071 del Código de comercio.

Sus atribuciones son:

1.^a Tomar el balance general del estado de la Compañía quebrada de modo que sea el resultado exacto de la verdadera situación de los negocios y dependencias de la quiebra.

2.^a Examinar los documentos justificativos de los

créditos para extender sobre cada uno de ellos el informe que deban presentar en la Junta de acreedores, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 1,101 al 1,104 del Código de Comercio. Respecto á títulos al portador, bastará el resultado del reconocimiento que se hubiese practicado conforme al artículo anterior.

3.^a Defender los derechos de la quiebra y ejercitar las acciones y excepciones que la competan.

4.^a Promover, siempre que sea útil, la convocación y celebración de las Juntas de acreedores.

5.^a Redactar y someter á la Junta de acreedores en el término señalado en el artículo 1140 del Código de comercio, un informe sobre la responsabilidad en que individualmente hayan podido incurrir los administradores de la Compañía quebrada por su participación en actos ó acuerdos contrarios á los Estatutos y por distracción de los fondos de la misma á otras negociaciones que las de su objeto ó empresa, conforme á lo establecido en el artículo 267 del Código de comercio, y mas especialmente á lo que se haya dispuesto sobre el particular en los Estatutos por que la Compañía quebrada se hubiere regido.

6.^a Proponer á la Junta de acreedores la distribución que haya de hacerse entre ellos del precio de la venta del ferrocarril, así como de los demás valores que pertenezcan á la compañía quebrada por el orden en que se hayan graduado los créditos.

Y 7.^a Hacer á cada acreedor el pago de lo que correspondiera.

Art. 19. En el exámen y reconocimiento de los créditos, así como en su graduación y pago á los acreedores, se observará lo dispuesto en los títulos 7.^o y 8.^o, libro 4.^o del Código de comercio, en cuanto no contraríen las disposiciones de esta Ley.

Art. 20. En cualquier estado del procedimiento de quiebra, puede la Compañía quebrada hacer á sus acreedores las proposiciones de convenio que á bien tenga sobre el pago de sus deudas. Estas proposiciones de convenio se sustanciarán y resolverán en la forma que establece esta Ley.

Art. 21. En el caso previsto por el artículo 25 del Real Decreto de 10 de Diciembre de 1858, el Gobierno cuidará de conciliar los derechos de los acreedores con el interés del Estado.

Mientras el camino no se enagene y lo siga explotando el Estado, los acreedores tendrán derecho á percibir los productos líquidos durante el tiempo por que se hubiese hecho la concesión anulada.

Si el Gobierno arrendase la explotación, los acreedores tendrán derecho á ser satisfechos con el precio del arrendamiento.

Art. 22. La compañía quebrada estará siempre representada durante la quiebra, según tuviese previsto para este caso por los Estatutos; y á falta de esta disposición especial, continuará su Consejo de Administración conforme á los mismos Estatutos.

Artículo transitorio. No se exigirá la publicación del edicto ni el plazo de los tres meses á las Compañías que con anterioridad á la promulgación de esta Ley hubiesen propuesto á sus acreedores un proyecto de convenio, siempre que esto se haya hecho con la publicidad prevenida en el párrafo 2.^o de este artículo ó otra mayor, y que se hubieren obtenido adhesiones bastantes para su aprobación.

Pero será requisito indispensable en este caso que el Tribunal haga un llamamiento por edictos á los acreedores para que en el plazo de dos meses puedan formalizar su oposición los que no se hubiesen adherido al convenio, aplicándose en un todo lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 12 de esta Ley.

Artículo adicional. Todas las disposiciones de la presente Ley serán aplicables á las compañías concesionarias de canales y demás obras públicas análogas que, subvencionadas por el Estado, tengan emitidas obligaciones hipotecarias.

Madrid, 14 de Agosto de 1882. — Aprobado por S. M. — A. MARTINEZ DE CAMPOS. — Hay una rúbrica. — Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar.

Es copia. — El Secretario del Gobierno General, Ricardo de Cubells.

NEGOCIADO DE OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCIONES CIVILES, MONTES Y MINAS.

CONCESION DE AGUAS. — PONCE.

Examinado el expediente promovido por Don Ignacio Lazalde, vecino de Ponce, en demanda de autorización para derivar del río Cerrillos 146 litros de agua por segundo, para dar movimiento á un artefacto de preparar café, y vistos los informes favorables de todos los Centros que han intervenido en su tramitación, así como también que las oposiciones presentadas han sido rebatidas victoriosamente por el peticionario; el Excmo. Sr. Gobernador General, de conformidad con lo propuesto por la Jefatura de Obras públicas y ajustándose á lo prescrito en el artículo 110 de la Ley general de Obras públicas, 146 de su Reglamento y 195, 197, 201, 202, 203 y 269 de la Ley de aguas, ha tenido á bien acceder á dicha petición bajo las condiciones siguientes:

1.^a Se autoriza á Don Ignacio Lazalde para derivar del río Cerrillos 146 litros de agua por segundo con el fin de mover un artefacto de preparar café, devolviéndolos íntegramente al cauce, despues de utilizados.

2.^a En el término de quince días á contar desde la fecha de la concesión, deberá constituir el concesionario en la Tesorería de Hacienda pública, como garantía de las condiciones estipuladas en este pliego la suma de